**PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE MURCIA**

EDICTO

María López Márquez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de los de Murcia.

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de suspensión de pagos número 130B/93, promovido a instancia del Procurador don Antonio Rentero Jover, en nombre y representación de la mercantil Francisco Rocamora Noales, S.L., y de doña Rosario Rocamora Gomariz, don José Pastor Ruiz y don José Rocamora Gomariz, en el que se ha dictado resolución de fecha 15 de los corrientes por la que se admite a trámite dicha solicitud con respecto a la mercantil mencionada en primer lugar, denegándose con respecto al resto de los solicitantes, nombrándose como Interventores al acreedor representante legal de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y a los Auditores Mercantiles don Miguel García Sánchez y don José Pérez Alarcón.

Asimismo, se hace saber que dicha mercantil se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir al por mayor, con domicilio social en Santomera (Murcia), carretera de Abanilla, 5.

Murcia, diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y tres.— La Secretaria Judicial, María López Márquez.

**AUDIENCIA PROVINCIAL
DE MURCIA**

EDICTO

Doña María del Carmen Buendía Cánovas, Secretaria de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Hace saber: Que en esta Sección Tercera se tramita rollo de apelación número 197/93-C, para sustanciar recurso de los de su clase contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Cartagena, en los autos de tercería de mejor derecho número 485/91, habiéndose dictado por esta Sala Sentencia de fecha 12 de enero de 1994, la cual resolvía el referido recurso y cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

Sentencia número 6/94.— Ilmos. Sres. don Joaquín de Domingo Martínez. Presidente.— don Juan Martínez Pérez, doña María Pilar Alonso Saura.— Magistrados.— En la ciudad de Murcia a doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Habiendo visto en grado de apelación la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial los autos de

tercería de mejor derecho, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Cartagena con el número 485/91, entre partes, como demandante y en esta alzada apelante Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador don Agustín Rodríguez Monje y dirigido por el Letrado don Francisco Valdés Albistur, y como demandados don José Ángel Alcolea López y doña Eulalia Mateo Mateo, declarados en rebeldía y el Banco de Santander, S.A., representado por el Procurador don Joaquín Ortega Parra y dirigido por el Letrado don Francisco Moreno Rodríguez, cuyas partes han sido en esta Audiencia representadas, el primero por el Procurador don Antonio Rentero Jover y el último por el Procurador don José María Jiménez Cervantes Nicolás, y dirigidas por los mismos Letrados.

En nombre de S. M. el Rey, fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Agustín Rodríguez Monje, en nombre y representación del Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 4 de enero de 1993, por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Cartagena, debemos revocar y revocamos la misma, y en su lugar dictamos otra por la que estimando la demanda formulada por el Procurador don Agustín Rodríguez Monje en la representación expresada contra el Banco de Santander, S.A., don José Ángel Alcolea López y doña Eulalia Mateo Mateo, debemos declarar y declaramos preferente el crédito derivado de la póliza de préstamo suscrita entre el que fue Banco de Vizcaya, S.A., con fecha 30 de marzo de 1987, y en la actualidad a favor del Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., en virtud de la subrogación en los derechos y obligaciones ostentados por los que fueron Banco de Bilbao, S.A., y Banco de Vizcaya, S.A., con motivo de su fusión en la entidad Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., frente al representado por el título ejecutado por Banco de Santander, S.A., origen de la demanda principal de la que dimana este incidente, y en su virtud una vez procedido conforme preceptúa el artículo 1.536 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hágase entrega a la parte actora de la suma obtenida hasta cubrir el montante de 652.282 pesetas (seiscientos cincuenta y dos mil doscientas ochenta y dos pesetas), procediéndose a retener asimismo, la suma de 375.000 pesetas (trescientas setenta y cinco mil pesetas), que se calcularon para intereses y gastos del procedimiento seguido contra los mismos demandados, hasta la fijación exacta de la suma a que asciendan, que se determinará en ejecución de sentencia, imponiendo a los demandados las costas de la primera instancia, sin verificar especial pronunciamiento en cuanto a las de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación a los empleados don José Ángel Alcolea López y doña Eulalia Mateo Mateo, que se encuentran en paradero desconocido, se acuerda la publicación del presente.

Dado en Murcia a quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.— La Secretaria, María del Carmen Buendía Cánovas.